

DETERMINANDO LA RELACIÓN ENTRE FISCAL STRESS Y EXTERNALIZACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS. EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Una mala situación financiera es un factor explicativo recurrente en la literatura que estudia el fenómeno de la externalización de servicios públicos. Esta relación puede haberse intensificado en los últimos años debido a la crisis económica y financiera mundial. Para analizar la relación existente entre fiscal stress, crisis global y la externalización, junto con otros factores políticos y socioeconómicos, nos centramos en este trabajo en uno de los servicios que mayor coste y complejidad presenta para los ayuntamientos, el servicio de recogida de basuras. Para ello, planteamos un modelo probit de datos de panel para el periodo 2002-2010. Los resultados obtenidos indican que varias variables de la condición financiera influyen en los procesos de externalización del servicio de residuos, junto con las variables políticas y socioeconómicas. Por último, el período de crisis global 2008-2010 influye positiva y significativamente a la hora de externalizar el servicio.

Palabras clave: Externalización; Ayuntamientos; Crisis; Recogida de residuos.

Introducción

Fiscal crisis es uno de los factores explicativos que mas se han utilizado en la literatura que ha estudiado el fenómeno de la externalización (Bel y Fageda, 2007). El razonamiento utilizado para relacionar ambos conceptos se basa en la idea de que los ayuntamientos que se encuentran en esta situación debido a caídas en las fuentes de ingresos, como transferencias e impuestos, y cuya solución no se establece en términos de subida de la presión fiscal a sus ciudadanos (Tiebout, 1956; Bel y Fageda, 2007), por

lo que los gestores públicos tenderán a cambiar la forma en la que prestan sus servicios, como la privatización, que permitan un ahorro en costes (Savas, 2000; Greene, 2002).

Sin embargo, el razonamiento teórico anterior, puede haberse modificado debido a la actual crisis económica y financiera mundial. Diferentes autores (James y Wooten, 2006; Maitlis y Sonenshein, 2010) han identificado que ante un crisis de dimensiones transfronterizas, la estructura y el desarrollo de cualquier organización puede verse afectada y cambiar considerablemente, por lo que las organizaciones deben de ser identificadas las causas que las originaron, y sus efectos previstos y aliviados (Christensen, Fimreite y Lægreid, 2011). Los efectos de la presente crisis en la administración pública se encuentran principalmente reflejados en el estricto control que se debe de hacer sobre los presupuestos y en concreto sobre el déficit (López-Hernández, Zafra-Gómez y Ortiz-Rodríguez, 2011). En vista de esta situación, es necesario identificar las características que subyacen y los aspectos específicos que quedan condicionados por la crisis y buscar fórmulas o estrategias encaminadas a mejorar la eficiencia (Rutger y Meer, 2010). Mas aún, en el área de las administración local, hay que poner especial énfasis en la multitud de formulas de gestión utilizadas para reducir costes, y por tanto, reducir el fiscal stress (Bel y Fageda, 2007).

De acuerdo con todo lo anterior, uno de los mecanismos aplicados para solucionar la situación de fiscal stress es el uso de formas de gestión propuestas por la Nueva Gestión Pública (NGP). Entre otras cuestiones, la NGP propone la mejora de la gestión pública con formulas de la empresa privada, promoviendo cambios en la estructura organizacional (Hood, 1991, 1995; Laughlin y Pallot, 1998; Van Helden, 2000). El objetivo es obtener una mirada hacia el mercado, y así incrementar la eficacia, la eficiencia y la productividad a través del uso de la externalización, o creando organismos más flexibles que permitan tener una estructura más flexibles que permitan

delegar la toma de decisiones y proporcionar mayor agilidad a la organización (Karp, 2005; Diefenbach, 2009).

En este sentido, el objetivo del presente trabajo consiste en verificar si las decisiones de los gestores públicos locales sobre la externalización se encuentran relacionadas con la presencia de problemas financieros, tal y como recoge se recoge en la literatura, centrándonos, concretamente, en determinar la probabilidad que existe de externalizar el servicio público de recogida de residuos cuando el ayuntamiento se encuentra en una situación de *fiscal stress*, diferenciando este último concepto del de *crisis management*, recogiendo este último el período referido a la actual crisis económica y financiera mundial, y con la intención de poner de manifiesto si este período ha influido en tales procesos de externalización de este servicio. El motivo por el que elegimos el estudio del servicio de recogida de residuos es que es uno de los servicios más importantes que los ayuntamientos tienen que prestar (Zafra-Gómez et al, 2012) y uno de los más externalizados en los países europeos y anglosajones (Bel y Fageda, 2011), siendo, a su vez, uno de los más estudiados en la literatura (Bel et al, 2010). A su vez, consideramos un concepto de *fiscal stress* amplio, no nos limitamos a considerar transferencias y variables relacionadas con el endeudamiento (Bel y Fageda, 2007), sino que consideramos variables relacionadas con las transferencias recibidas, la capacidad fiscal del ayuntamiento, la posición de tesorería, su endeudamiento y la sostenibilidad del presupuesto de la entidad. Junto a estas variables incorporamos en el modelo factores de tipo político y variables socioeconómicas, así como la calidad del servicio prestado.

¿Es la externalización un mecanismo para aliviar las crisis financieras?

Diferentes situaciones de crisis financieras han dado lugar a determinadas acciones para intentar su superación (Carmeli, 2008), y tales acciones han sido implementadas bajo el marco teórico que ofrece la NGP. Concretamente, tal y como señala Hood en su importante artículo de 1995 in page 102 “NGP is often interpreted as a response to fiscal stress y resistance to extra taxes”, señalando que los gobiernos con peores indicadores de deuda, y peores déficits serán los que tengan más posibilidades de llevar implantar políticas de gestión basadas en el NGP.

La NGP basa sus postulados en la teoría económica de la elección pública. Concretamente, la introducción de fórmulas de gestión del ámbito privado producirán un ahorro en costes provocando la mejora de la efectividad y de la eficiencia en la provisión de los servicios públicos (Osborne y Gaebler, 1992; Hood, 1995; Boyne, 1998; Bel y Warner, 2008; Bel y Fageda, 2010).

El uso por parte de los gestores públicos de la externalización con la intención de obtener mayores niveles de eficiencia en la prestación de los servicios públicos locales proviene de entre otras razones de que el ayuntamiento se encuentre inmerso en una situación de crisis financiera, por lo que debería de emprender acciones encaminadas a su superación. De entre las diferentes alternativas y de acuerdo con la teoría económica, Christoffersen y Bo Larsen, (2007) indican que ante una situación de *fiscal stress* los gestores públicos pueden los ingresos vía aumento de los impuestos (Tiebout, 1965) o bien, incrementar la deuda municipal (Hendrick, 2011). La otra opción consiste en reducir la calidad de los servicios que presta el ayuntamiento, lo que provocará una reducción del coste del servicio y así el ayuntamiento aliviará su situación *de fiscal stress*. Sin embargo, los políticos y gestores públicos se resisten a llevar a cabo estas acciones por el hecho del coste político en número de votos o de reelección que pueden suponer las medidas anteriores. Por este motivo una tercera vía

consiste en llevar cabo procesos de externalización (Zafra-Gómez y Muñiz, 2010), ya que tal y como hemos señalado estos producirán un ahorro en costes y por tanto, un alivio en fiscal stress, lo que provocará una mejora en el uso de los recursos públicos, mejor *performance* para la entidad y mayor satisfacción para el ciudadano (Girth et al., 2012; Kelman, 2002).

Sin embargo, algunos autores han demostrado que la relación entre *fiscal stress* y los procesos de externalización no es clara. Boyne (1998) señala que “the evidencia provides little support for the view that fiscal stress is a significant constraint on decisions to contract out”. En el mismo sentido se manifiesta Bel y Fageda (2007) cuando indica que la variable *fiscal stress* tiene influencia sobre los procesos de externalización cuando un amplio rango de servicios son considerados (Ferris 1986; Miranda, 1994; Nelson, 1997; Kodrzycki, 1998; Brown et al., 2008; Hebdon y Jalete, 2008), mientras que si “one service do not usually see influence from this factor” (p. 527). Esto puede ser debido a que en estos estudios no se ha utilizado un concepto amplio para medir el *fiscal stress*, y normalmente solo se introduce una variable para testar estas hipótesis. Concretamente, en la mayoría de los casos se estudia la relación entre ingresos tributarios, limitaciones legales al acceso al endeudamiento y el tamaño de las transferencias recibidas del estado, y externalización (Bel y Fageda, 2007) y es que tal y como señala Boyne (1998) los modelos presentados incluyen pobres medidas de *fiscal stress*.

Por tanto, parece necesario tener en cuenta una visión más amplia del concepto de fiscal stress. Es más, “fiscal stress is a change in financial condition for the worse” (Smith, 2012; 3), es decir, es un grado de la condición financiera. Así, para predecir si ante situaciones de fiscal stress los gestores públicos optan por externalizar el servicio de basura se deberá de tener en cuenta no únicamente medidas como las señaladas

anteriormente, sino que también se deben de tener en cuenta medidas como la posición de tesorería de la entidad o el déficit presupuestario, entre otras. Así, es posible obtener una imagen completa de los diferentes elementos que comprenden la condición financiera de la entidad local (Zafra-Gómez et al, 2009), y la incidencia que cada uno de estos elementos puede tener sobre la probabilidad de externalizar.

Concretamente, sería necesario tener en cuenta el uso del concepto de condición financiera (Groves et al., 2003; Hendrick, 2011) para medir situaciones financieras desfavorables. Por su parte, (Greenberg y Hiller, 1995; CICA, 1997) consideran que la condición financiera debe de tener en cuenta los siguientes los siguientes aspectos: sostenibilidad, flexibilidad y vulnerabilidad. Entendiéndose por sostenibilidad la capacidad que presenta la entidad para mantener, fomentar y preservar el bienestar social de sus ciudadanos a través de recursos que tiene a su disposición. Por flexibilidad, la facultad que tiene la entidad a la hora de responder a los nuevos cambios económicos y circunstancias financieras dentro de los límites de su capacidad fiscal; y por vulnerabilidad, el nivel de dependencia de una entidad respecto a la financiación recibida del exterior para el mantenimiento del gasto público. Así pues, Mercer y Gilbert (1996) consideran un total de diecisiete indicadores, relacionados con cinco dimensiones de la condición financiera: ingresos, gastos, impuestos, peso de la deuda y variables económicas. En su estudio obtienen que las dimensiones más relevantes para la determinación de la condición financiera, aplicando un análisis factorial, son la condición fiscal, peso de la deuda e ingresos base. Esta misma técnica es empleada por Zafra-Gómez et al. (2009), quienes obtienen un índice que sintetiza tres dimensiones de la condición financiera de las entidades locales (sostenibilidad, independencia financiera y flexibilidad).

Con todo lo anterior para una correcta medición de la condición financiera es necesario medir, la solvencia a corto plazo, la solvencia presupuestaria –haciendo especial hincapié en la sostenibilidad presupuestaria, la flexibilidad de pago de la deuda, y la independencia financiera es decir, en que medida puede la entidad atender sus obligaciones con sus ingresos por impuestos. Todas estas medidas son recogidas en el anexo 1 (tabla nº 1) y evaluadas a través del conjunto de indicadores que provienen de información presupuestaria y de balance. Con todo lo anterior, establecemos la siguiente hipótesis.

H₁: La probabilidad de que el gestor público externalice un servicio público local aumentará conforme mayor sea el fiscal stress.

H_{1A}: La probabilidad de que el gestor público externalice un servicio público local aumentará conforme peor sea de Solvencia de tesorería.

H_{1B}: La probabilidad de que el gestor público externalice un servicio público local aumentará conforme mayor sea el Déficit Presupuestario.

H_{1C}: La probabilidad de que el gestor público externalice un servicio público local aumentará conforme peor sea la Independencia Financiera.

H_{1D}: La probabilidad de que el gestor público externalice un servicio público local aumentará conforme peor sea la flexibilidad financiera.

Fiscal stress o Crisis management?

Tal y como hemos comentado en la sección anterior, a lo largo de los últimos años han aparecido, en la literatura, numerosos conceptos para medir la situación de la condición financiera de las entidades públicas. Sin embargo, durante la última década han surgido diferentes acontecimientos que pueden haber propiciado un cambio de estos

conceptos. Nos estamos refiriendo a como la globalización de la economía ha propiciado que situaciones que se producen en determinadas partes del mundo afecten a la actividad económica de un conjunto amplio de países.

Esta situación ha dado lugar al concepto de *crisis management*. Este concepto se desarrolla en el ámbito del sector privado, sin embargo en el contexto actual es especialmente trasladable al ámbito público. *Crisis management* puede diferenciarse claramente de los conceptos de *fiscal crisis*, *fiscal distress*, *financial condition*. Mientras que estos últimos se enmarcan dentro de lo que bien pueden considerarse problemas económicos y financieros de una entidad individual, *crisis management* parte de la consideración de una serie de factores y acontecimientos del entorno que condicionan el desarrollo de la actividad empresarial de las unidades de producción y que además provocan cambios drásticos en la vida organizacional (Rosenthal, et al, 1989; James y Wooten, 2010). En el sector público, suponen cambios sustanciales y estructurales que requieren por parte de los gestores públicos respuestas estratégicas para adaptarse a las nuevas circunstancias creadas.

Aunque la tipología de acontecimientos que engloban el concepto de *crisis management* son diversos (gripe N1H1, el desastre del derrame de BP en la costa de Estados Unidos, entre otras), sin duda el acontecimiento que, actualmente, tiene más impacto es la crisis financiera y económica mundial (Moss, 2010). El concepto de *crisis management*, requiere la presencia de un conjunto de elementos claramente diferenciadores de cualquier otro tipo de problemas. En primer lugar, se ha de detectar una amenaza (Hermann, 1963), una amenaza de gran magnitud y que puede afectar significativamente los objetivos planteados por la organización. El propio autor señala que el concepto de crisis también conlleva un cierto elemento de sorpresa. Pero ante esta situación del factor sorpresa y el de amenaza surge la reacción que debe de tener la

entidad ante ambas situaciones. Es lo que Hermann denomina decisión en el corto plazo.

Por lo tanto, una *crisis management* debería de presentar estos elementos, aunque posteriormente este mismo autor, junto con Brady (1974), minimizan los elementos del factor sorpresa y una rápida decisión. A su vez, Ansell, et al (2010), identifican tres dimensiones que toda *crisis management* debe de contener: *political boundaries*, *functional* y *dimenssion*. Que una amenaza se convierta en *crisis management* depende de la intensidad con la que se desarrollen estos elementos. El primero hace referencia a la capacidad del evento de superar las fronteras geográficas. Además, este concepto también recoge como elemento importante el nivel de coordinación que deben de desarrollar los gobiernos y que puede implicar coordinación vertical y horizontal. En relación con el aspecto funcional éste hace referencia al nivel de afectación de las diferentes áreas funcionales de la entidad, de tal forma que este tipo de crisis puede afectar y sobrepasar las fronteras de diferentes subsistemas de la organización. Por último, debemos de tener en cuenta la duración. Tal y como indican estos autores, hay crisis que presentan un principio y un final concreto. Sin embargo, hay otras en las que no se pueden identificar estos elementos y van surgiendo a lo largo de la concatenación de diferentes acontecimientos (Birkland, 2009). Si las crisis se caracterizan por presentar este último desarrollo, no cabe duda de que la respuesta a la misma será mucho más difícil de concretar y de que realmente sea efectiva.

No cabe duda, que las características comentadas anteriormente, se encuentran presentes en su máxima intensidad en la actual crisis económica y financiera mundial, y tal y como hemos indicado, las respuestas a las mismas han sido variadas y discontinuas en el tiempo en base a toma de decisiones progresivas en diferentes entornos y por diferentes gobiernos, aunque también es necesario señalar que el nivel de intensidad de

la crisis se ha manifestado con ciertas diferencias en función del país que se analice. De los factores anteriores, sin duda el más importante en una crisis, es poder tomar una adecuada respuesta a tal situación y que ésta sea efectiva (Boin et, al, 2005).

En este contexto, la pregunta que nos planteamos es si la relación entre fiscal stress-externalización en los ayuntamientos se habrá modificado en los últimos años debido al impacto de la crisis económica y financiera global. Si atendemos a las hipótesis de partida de esta relación es decir, el gestor público usa estas formas de gestión para reducir costes y aliviar su fiscal stress, se puede entender que ante la presión sobre el control del déficit público de todos los niveles de la administración que la crisis económica y financiera global está produciendo, los gobiernos locales puedan potenciar el uso de este recurso. Este planteamiento coincide con el realizado por Funkhouser (2012) cuando señala que el impacto de la recesión ha mermado claramente las fuentes de ingresos, junto con la reducción de sus gastos, por lo que “Now the pressure to outsource services is greater than it has ever been” (Pág. 1). Por este motivo, planteamos la siguiente hipótesis.

H₂: La actual crisis económica y financiera global (crisis management) aumentará la probabilidad de externalizar los servicios públicos.

Calidad del servicio y externalización

Tal y como indican (Pollitt y Bouckaert, 2000) la calidad es un objetivo central de los gestores públicos. La introducción del operador privado en la gestión de los servicios públicos locales supone la posible reducción de sus costes, pero también la búsqueda por parte del gestor público de una supuesta mejora de la calidad del servicio sobre todo en municipios de tamaño inferior (Morgan et al., 1981; Stein, 1990; Boyne, 1998). Sin embargo, la evidencia no es clara, ya que autores como Hart et al., (1997)

señalan que el operador privado sólo le interesa reducir costes y esto se consigue a través de la reducción de los niveles de calidad de los servicios prestados. Siguiendo la perspectiva aportada por Boyne, desde el punto de vista del presente trabajo, el gestor público ante la existencia de bajos niveles de calidad, puede buscar la iniciativa privada con la intención de aumentar los niveles de eficiencia. En este sentido planteamos la siguiente hipótesis:

H₃: La calidad del servicio prestado aumentará la probabilidad de externalizar debido a que los gestores públicos piensan que la gestión privada conseguirá aumentarla.

Factores políticos y externalización

Tradicionalmente, la actitud ideológica de los gobiernos ha sido incluida en modelos que buscan determinar los principales factores influyen en la decisión de externalizar (Bel y Fageda, 2007). La asociación entre partidos que representan la ideología de izquierdas se espera que sea negativa, mientras que los partidos con ideología conservadora se espera que presenten una relación positiva. No obstante, muy pocos estudios han encontrado una relación significativa entre ideología política y externalización (Dubin y Navarro, 1988; Dijkgraaf et al., 2003; Walls et al., 2005; Bel y Fageda, 2007; Zullo, 2009). En este sentido, podemos establecer la siguiente hipótesis:

H₄: Los partidos conservadores presentarán una mayor probabilidad de implementar procesos de externalización.

Otro aspecto a tener en cuenta es si la fragmentación política de los gobiernos locales puede haber afectado a los procesos de externalización. El segundo postulado a analizar dentro de los factores políticos, hace referencia a la presencia o no de un gobierno en coalición o en mayoría absoluta. Esta relación se basa en el modelo teórico

desarrollado por Ashworth et al. (2005), en el que se estima que una elevada fragmentación en el gobierno supone una mayor posibilidad de que en el largo plazo crezca el gasto público. En este sentido, las concesiones que es necesario hacer a las minorías para conseguir su apoyo al gobierno se traducirán en un incremento del gasto público (Salinas y Álvarez, 2002; León et al., 2010), y por tanto, un aumento de la posibilidad de externalizar servicios para reducir los gastos de la entidad. Por su parte, Hagen y Vabo (2005) observan que los gobiernos con una disminuida fragmentación logran superávits presupuestarios en contraposición a aquellos otros en los que la fragmentación resulta elevada.

Por el contrario, autores como Alesina y Rosenthal (1994) observan una escasa influencia de la fragmentación política en las políticas fiscales. Asimismo, Jones et al. (1997) consideran que los gobiernos fragmentados llevan aparejados pequeños cambios presupuestarios. Para el caso español, Benito y Bastida (2008), Guillamón et al. (2011), ponen de relieve que a menor fragmentación política mayor es el gasto de la entidad local. Por lo tanto, no podemos establecer un signo de partida a la hora de evaluar la relación entre fragmentación política, aumento del gasto presupuestario y externalización. De acuerdo con lo anterior, presentamos la siguiente hipótesis.

H₅: La fragmentación de los gobiernos locales puede aumentar/disminuir la probabilidad de externalizar servicios públicos.

Factores Socioeconómicos y externalización

Finalmente, es necesario incluir un conjunto de variables para medir el impacto de las características sociales y económicas del municipio, debido a que estos pueden condicionar el coste de los servicios públicos y por tanto, favorecer los procesos de externalización. Los trabajos de Rubin y Stein (1990) y Zullo (2009) consideraron que

la disminución de la población disminuye la probabilidad de externalizar servicios públicos, debido a que produce una contracción de los impuestos. Sin embargo, “la variable población puede ser considerada como una variable *proxy* de la demanda del servicio local” (Bel et al., 2010: 41), por lo que, al contrario de lo que señalan los autores anteriores, puede esperarse que un aumento de la población, al implicar un aumento del número de servicios, puede aumentar la probabilidad de externalizar. Por su parte, Bel y Mur (2009) indican que las zonas turísticas con alta población estacional pueden presentar mayores costes que en otros ayuntamientos en donde esta característica no está presente, por lo que es probable que los ayuntamientos que presten sus servicios en una zona turística pueden presentar una mayor probabilidad de llevar a cabo procesos de externalización. Así pues, planteamos la siguiente hipótesis:

H₆: El aumento/disminución de la población aumentará la probabilidad de externalizar el servicio.

H₇: Las características turísticas del municipio aumentará la probabilidad de externalizar el servicio.

Evidencia empírica para el servicio de recogida de residuos españoles.

Datos

La población objeto de estudio del presente trabajo está constituida por los 3.253 ayuntamientos españoles de más de 1.000 habitantes, ya que no se dispone de información de determinadas variables socioeconómicas consideradas en el estudio para los ayuntamientos con una población inferior a 1.000 habitantes. La disponibilidad de información económica-financiera proporcionada por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), hace que se obtenga una muestra de 1.043 ayuntamientosⁱ, para el período 2002-2010, que representan el 38,1% de los municipios objeto de estudio, abarcando al

70,49% de la población. De estos 1043 ayuntamientos 151 eligieron externalizar el servicio.

Con estos datos, examinamos la solvencia a corto plazo, definida como la habilidad de la organización para generar suficiente liquidez para pagar sus dedas a corto plazo (Groves et al., 2003); flexibilidad, definida como la capacidad de la organización para responder a los cambios en la economía o de sus circunstancias financieras vía modificaciones del endeudamiento (Greenberg y Hiller, 1995; CICA, 1997); sostenibilidad presupuestaria (o solvencia nivel de servicios), definida como la habilidad para mantener, promover y proteger los servicios sociales de la población, empleando los recursos a su disposición (Greenberg y Hiller, 1995; CICA, 1997; Groves et al., 2003); independencia financiera, definido como el nivel de dependencia sobre los fondos externos recibidos vía transferencias o subvenciones (ICMA; 2003; Honadle, 2003; Zafra-Gómez et al., 2009a). Finalmente, consideramos la solvencia alargo plazo de la entidad, usando un amplio horizonte temporal para el estudio. Todas estas medidas se muestran en el apéndice 1 y son evaluadas usando un conjunto de indicadores derivados de la información presupuestaria.

Específicamente, introducimos un indicador de solvencia de tesorería, que se construye como fondos líquidos más los derechos reconocidos netos divididos entre las obligaciones reconocidas netas (IRT, índice de remanente de tesorería). La flexibilidad es medida como la habilidad de atender las obligaciones derivadas de la deuda, con los recursos fiscales que tiene la entidad (IPCF). La medida de independencia financiera refleja como las organizaciones pueden financiar sus gastos sin transferencias o subvenciones (IIF). Finalmente, la sostenibilidad se mide a través del déficit o superávit presupuestario no financiero (IRPNF).

La variable calidad se ha obtenido de la Encuesta de Equipamiento e Infraestructuras del Ministerio de Administraciones Públicas. Esta variable hace referencia a la adecuación o no del servicio a una serie de características del mismo, de tal forma que esta variable puede tomar valor 1 inadecuado o valor 2 adecuado en función de: número insuficiente de contenedores; limpieza de los contenedores; regularidad en la recogida de basura; condiciones de los contenedores.

La orientación y la Fortaleza política son obtenidas a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las variables socioeconómicas fueron obtenidas del Anuario Económico de la Caixa.

La variable externalización se obtuvo a través de una base de datos acerca de los anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) donde se anuncia la concesión de la externalización de los servicios a las empresas adjudicatarias. Esta base de datos incluye además la duración de la misma, la descripción de las condiciones aplicables entre otras. Esta variable toma los valores 0 para aquellos ayuntamientos que no externalizan el servicio de basuras y 1 cuando el ayuntamiento externaliza el mismo.

Metodología

Varios estudios han tratado de determinar los factores explicativos de la decisión de externalizar servicios públicos. Estos estudios han estado centrados básicamente en dos servicios concretos, el servicio de aguas y basuras (Dijkgraaf, Gradus, y Melenberg, 2003; Walls, Macauley y Anderson, 2005) y otros sobre la probabilidad de externalizar atendiendo a diferentes servicios y diferentes formas de gestión (Tavares y Camões, 2007; Zullo, 2009; Rodrigues et al, 2012). Sin embargo, son pocos los estudios que hayan estudiado los factores explicativos sobre la probabilidad de externalizar servicios teniendo en cuenta sus efectos a lo largo del tiempo. Los trabajos de González-Gómez

et al, (2009), González-Gómez et al, (2011) y Miralles (2009), han tratado de medir estos efectos, pero su aplicación se ha desarrollado en el servicio de agua. Sólo los trabajos de Bel y Miralles, (2003) y Bel et al, (2010) estudian de una manera dinámica la externalización del servicio de basuras.

El estudio dinámico que determina la probabilidad de externalizar a nuestro entender tiene dos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, tal y como indican Bel et al (2010) es necesario que cada vez se lleven a cabo estudios dinámicos para un amplio horizonte temporal donde la variable dependiente junto con sus factores explicativos sean evaluadas para un período amplio de tiempo.

En segundo lugar, como han observado Bel y Fageda (2007) y González-Gómez y Guardiola (2009), la mayoría de estudios no han sido capaz de explicar los factores que motivan la decisión de externalizar los servicios, los modelos han tenido un poco poder explicatorio, quizás debido a la metodología seguida al no poder recoger la verdadera dinámica del proceso de externalización. Esta dificultad se refiere a que las variables hacen referencia al momento en que los ayuntamientos llevan a cabo la externalización y no al momento en que se tomó la decisión.

Resultados

Los resultados se muestran en la tabla nº 2. En relación con la primera hipótesis testada, podemos ver que se obtienen resultados diversos. Mientras que habíamos establecido como hipótesis que la posición de solvencia a corto plazo medida por la IRT debería de relacionarse negativamente con los procesos de externalización, los resultados obtenidos en relación con la externalización del servicio de basura, muestran una relación positiva, aunque la misma no resulta ser significativa, por lo que no se

puede establecer evidencia de que las decisiones de los gestores públicos sobre la externalización del servicio se encuentre vinculada a una posición negativa de tesorería.

La hipótesis 1b pretendía determinar si los procesos de outsourcing se encuentran influenciados por la presencia de déficit presupuestario. En este sentido el modelo detecta que la decisión de externalizar el servicio de basura depende del nivel de déficit que presente la entidad local, concretamente la variable IRPNF muestra un valor de -0.016 y resulta ser significativa. Esto demuestra que las investigaciones que estudian la relación entre fiscal stress y la externalización deberían de incluir variables de Budget déficit porque los gestores públicos lo tienen en cuenta para la toma esta decisión.

El siguiente componente analizado es la independencia financiera. La falta de subvenciones puede provocar que los gestores públicos lleven a cabo procesos de externalización. En este caso, se cumple la hipótesis 1C a menor nivel de independencia mayor será la probabilidad de que los gestores públicos externalicen el servicio de basuras. Se constata unos de los supuestos que mayores resultados ha obtenido en la literatura previa.

Por último, constatamos que la flexibilidad financiera también influyen en los procesos de externalización, cuanto los ingresos fiscales no son suficientes para atender la carga financiera – deuda e intereses- los gestores públicos tienen a externalizar en mayor medida el servicio de basuras. Una menor capacidad de devolución de la deuda contribuye a aumentar la probabilidad de externalizar este servicio.

La segunda hipótesis planteada consideraba la posibilidad de que la actual crisis económica global hay afectado a la decisión de externalizar el servicio de basuras. Efectivamente, la variable introducida en el modelo (CRISIS) resulta obtener una

relación positiva y significativa con los procesos de externalización. Estos resultados vienen a corroborar que en estos tres ejercicios de crisis global evaluados (2008-2010) los gestores públicos utilizan la externalización con la intención de aliviar los efectos de la misma.

En cuanto a la variable calidad, ésta no muestra una relación negativa ni significativa con los procesos de externalización del servicio de basura, tal y como habíamos establecido en las hipótesis de partida. A los gestores públicos no les preocupa mejorar el nivel de calidad del servicio o no perciben que la iniciativa privada pueda mejorar la calidad del mismo.

En relación con las variables políticas los resultados son dispares. Mientras que la hipótesis que establece que el signo político demuestra una relación significativa y negativa con la externalización, lo que se traduce en que los gobiernos de carácter conservador tienen una mayor probabilidad de externalizar el servicio de basura. Estos resultados están en línea con la literatura sobre las decisiones políticas de los gobiernos conservadores los cuales se basan en políticas neoliberales y basadas en el uso de prácticas de las organizaciones privadas. El hecho de que nuestros resultados sean sobre un período amplio de tiempo puede otorgar un mayor grado de fiabilidad que aquellos trabajos que únicamente han tratado de medir su efecto en un único año (véase Zullo, 2009).

Sin embargo, la hipótesis que relacionaba la fragmentación o fortaleza política del gobierno muestra una relación negativa aunque no es significativa, por lo que no podemos mostrar evidencia de que la fragmentación política afecte la decisión de los gestores públicos de externalizar.

Por último, evaluamos si los factores socioeconómicos encuentran relación con los procesos de externalización. Los resultados muestran que ambas hipótesis se cumplen, aunque con signos distintos. Mientras que se demuestra que a mayor población mayor es la probabilidad de externalizar el servicio de basuras, la relación entre las características turísticas del municipio y la externalización del servicio de basuras muestra una relación negativa.

Tabla nº2. Resultados Efectos marginales del Probit.

Variable	dy/dx	Std. Err.	z	P>z
ln población	.0080554	0,00162	4,97	0,000
Índice Turístico	-.0011885	0,00059	-2	0,046
IRT	.0005252	0,00039	1,35	0,176
IIF	.0221575	0,00753	2,94	0,003
IPCF	-.0000218	0,00006	-0,35	0,723
IRPNF	-.0169349	0,00868	-1,95	0,051
calidad	.0039964	0,007	0,57	0,568
Signo	-.0034361	0,0025	-1,38	0,016
Fortaleza	-.0031264	0,00246	-1,27	0,204
Crisis	.0070223	0,00277	2,53	0,011

Conclusion y Discussion

Fiscal stress es una de las principales variables incluidas en los modelos que buscan identificar los factores que explican porque los ayuntamientos externalizan sus servicios. Sin embargo, la mayoría de modelos desarrollados han tenido poco poder explicativo aspecto que puede ser debido a que no se ha recogido adecuadamente la dinámica del proceso de externalización y su relación con las variables de fiscal stress que lo provocan. En este sentido varios autores han señalado la necesidad de estudiar el

fenómeno de una manera dinámica teniendo en cuenta los diferentes momentos del tiempo en que se producen los factores explicativos y registrando los procesos de externalización a lo largo de un período de tiempo, y a su vez, teniendo en cuenta que entre el momento en que se detecta la situación de fiscal stress y se toma la decisión existe un período denominado *time lag* (Bel y Fageda, 2007; González-Gómez et al., 2009). En este sentido, este trabajo considera ambos aspectos en su metodología, aplicando la misma a una muestra de más de 1.200 ayuntamientos españoles de una población de más de 1.000 habitantes, lo que supone contar con una de las muestras más amplias para el estudio del servicio de recogida de basuras en Europa. A su vez, otro factor que puede afectar al escaso poder explicativo de los modelos que miden tal relación es la pobreza de las medidas de fiscal stress utilizadas (Boyne, 1998) por lo que en este sentido, incorporamos un conjunto amplio de variables en lugar de la tradicional única medida considerad en modelos anteriores. Los resultados demuestran que más medidas deben ser consideradas cuando la relación fiscal stress-externalización se evalúa. Para el caso del servicio se recogida de basuras se detecta que déficit presupuestario, transferencias y la flexibilidad afectan a tal proceso, de tal forma que cuanto peores valores obtengan estos valores mayor probabilidad de externalizar el servicio se producirá. En relación con las variables políticas, encontramos que los gobiernos locales conservadores presentan una mayor probabilidad para llevar a cabo procesos de externalización, mientras que la fragmentación política no tiene efectos sobre este proceso. Los municipios que atienden una mayor demanda de servicios públicos, tienden a externalizar más. Por el contrario, a diferencia de los resultados mostrados en otros estudios, encontramos una relación negativa entre índice turístico y externalización.

Junto con los anteriores postulados evaluados nos surge otra cuestión sobre la relación entre *fiscal stress* y externalización y su estudio en el contexto de la actual crisis económica y financiera mundial. Los argumentos teóricos recogidos en la literatura a este respecto señalan como altamente probable que la crisis mundial haya producido una reducción de los recursos financieros de las entidades locales y un recorte de los gastos y que para aliviar tal situación se produzca un aumento de este fenómeno. El presente trabajo muestra evidencia empírica de los efectos de la crisis sobre los procesos de externalización y demuestra una relación positiva entre ambos para el servicio de recogida de residuos.

Comenzábamos este trabajo argumentando que una de las propuestas bajo el paraguas de la NGP para abaratar costes en los ayuntamientos es el uso de la externalización. Los resultados obtenidos a través del presente trabajo ponen de manifiesto que la percepción que los ayuntamientos tienen de este postulado se manifiesta en el mismo sentido debido a que parece constatarse que en períodos de *fiscal stress* los gestores públicos deciden externalizar servicios para intentar aliviar los efectos de la misma. Es más, en períodos de crisis transfronterizas como la actual crisis económica y financiera mundial este fenómeno se agudiza. Estos resultados permiten añadir nuevas evidencias sobre el debate actual entre la aplicación de los postulados de la NGP o de los Post-NGP. Mientras algunos autores como Pollitt (2009) o Kuhlmann (2010) abogan por iniciar procesos de recentralización de la gestión debido a los problemas de ineficiencia y de coordinación ocasionados con la aplicación de la NGP, otros (por ejemplo- Zafra-Gómez et al, 2012) consideran que no se puede generalizar y que habrá que estudiar cada fórmula de gestión y proponer fórmulas conjuntas entre la NGP y la Post-NGP. Por supuesto que queda claro que los gestores públicos eligen la externalización y más en época de crisis global pero, ¿es esta una decisión adecuada?

Estudios futuros deberían de ir encaminados a poner de manifiesto que la elección hecha por los gestores públicos proporcionará en el futuro un ahorro en costes y, efectivamente, el fiscal stress es reducido.

Bibliografía

Alesina, A. y Rosenthal, H. 1994. *Partisan Politics, Divided Governments, y the Economy*, Cambridge University Press, New York.

Ansell, C; Boin, A y Keller, A. 2010. Managing Transboundary Crises: Identifying the Building Blocks of an Effective Response System, *Journal of Contingencies y Crisis Management*, volume 18, 4, 195-207.

Ashworth, J., Geys, B y Heyndels, B., 2005. Government Weakness y Local Public Debt Development in Flemish Municipalities, *International Tax y Public Financial*, 12, 395-422.

Bel, G. y Fageda, X. 2007. Why do local governments privatize public services? A survey of empirical studies. *Local Government Studies*, 33 (4): 517-34.

Bel, G. y Fageda, X. 2010. Empirical analysis of solid management waste costs: Some evidence from Galicia, Spain. *Resources, Conservation y Recycling*, 54: 187-193.

Bel, G. y Fageda, X. 2011. "Big Guys Eat Big Cakes: Firm Size y Contracting in Urban y Rural Areas", *International Public Management Journal*, 14: 1, 4 — 26

Bel, G. y M. Mur. 2009. 'Intermunicipal Cooperation, Privatization y Waste Management Costs: Evidence from Rural Municipalities', *Waste Management*, 29, 2772-8.

Bel, G. y Miralles, A. 2003. Factors Influencing the Privatisation of Urban Solid Waste Collection in Spain, *Urban Studies*, 40, 1323

- Bel G, y Warner, M. 2008. Challenging issues in local privatization. *Environment y Planning C: Government y Policy*, 26(1), 104-109.
- Benito, B. y Bastida, F. 2008. "Política y gestión financiera municipal", *Revista de Contabilidad- Spanish Accounting Review*, 11: 55-78.
- Birkland, T. (2009), 'Disasters, Catastrophes, y Policy Failure in the Homeland Security Era', *Review of Policy Research*, Volume 26, Number 4, pp. 423–438.
- Boin, R.A., 't Hart, P., Stern, E. y Sundelius, B. (2005), *The Politics of Crisis Management*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Boyne, G. 1998. Bureaucratic theory meets reality: public choice y service contracting in U.S. local government. *Public Administration Review*, 58(6): 474-484.
- Brady, L.P. 1974. Threat, decision time, y awareness: The impact of situational variables on foreign policy behavior. (Unpublished doctoral dissertation). Political Science Department, Ohio State University.
- Brown T L, Potoski M, Van Slyke D M. 2008. Changing modes of service delivery: how past choices structure future choices, *Environment y Planning C: Government y Policy* 26(1) 127 – 143.
- Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA). (1997). *Indicators of Government Financial Condition*. Toronto.
- Carmeli, A. 2008. The Fiscal Distress of Local Government in Israel. Sources y coping Strategies, *Administration y Society*, 39, 8, 984-1007.
- Christoffersen H, Bo Larsen K, 2007, "Economies of scale in Danish municipalities: expenditure effects versus quality effects" *Local Government Studies* 33, 77-95.
- Christensen, T., Fimreite, A.L y Læg Reid, P. 2011. Crisis Management: The Perceptions of Citizens y Civil Servants in Norway, *Administration y Society*, published online 20 July 2011, DOI: 10.1177/0095399711412914.

- Diefenbach, T. 2009. New Public Management in public sector organizations. The dark side of managerialistic “Enlightenment”. *Public Administration*, 87(4): 892-909.
- Dijkgraaf, E., Gradus, R.H.J.M. y Melenberg, B. 2003. Contracting out refuse collection, *Empirical Economics*, 28, 3, pp.553–570.
- Dubin, J. y Navarro, P. (1988) How markets for impure public goods organize: the case of household refuse collection, *Journal of Law, Economics y Organization*, 4(2), pp.217–241.
- Ferris, J. 1986. The decision to contract out: an empirical analysis, *Urban Affairs Quartely*. 22, 2, 289-311.
- Funkhouser, M. 2012. Outsourcing y the Critical Need for Access to Capital, *Public Administration Review*, DOI: 10.1111/j.1540-6210.2012.02655.x
- Girth, A. Johnson, J., Hefetz, A. y Warner, M. 2012. Outsourcing Public Service Delivery: Management Responses in Noncompetitive Markets, *Public Administration Review*, DOI: 10.1111/j.1540-6210.2012.02596.x.
- González-Gómez, F. y Guardiola, J. 2009. A duration model for the estimation of the contracting out of urban water management in southern Spain, *Urban Affairs Review*, vol. 44 no. 6 886-906.
- Greenberg, J y Hillier,D. 1995. Indicators of Financial Condition for Governments. Paper presented at the 5th Conference of Comparative International Governmental Accounting Research. (No date) Paris-Amy.
- Greene, 2002. *Cities y privatization: Prospects for the new century*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Groves, M., Godsey, W y Shulman, M., 2003. *Evaluating Financial Condition: A Handbook of Local Government*, Third Edition, The International City/County Management Association.

- Guillamón, M.D. Benito, B. y Bastida, F., 2011. Evaluación de la deuda pública local en España, *Revista Española de Financiación y Contabilidad-Spanish Journal of Finance y Accounting*-, Vol. XL, Núm. 150, Abril-Junio, 251-285
- Hagen, T.P. y Vabo, S.I., 2005. Political characteristics, institutional procedures y fiscal performance: Panel data analyses of Norwegian local governments, 1991-1998, *European Journal of Political Research*, 44, 43-64.
- Hart, O. D., Shleifer, A., y Vishny, R. W. 1997. The proper scope of government: Theory y an application to prisons. *Quarterly Journal of Economics*, 112, 1127–1161.
- Hebdon, R. y Jalette, P. 2008. The restructuring of municipal services: a Canada–United States comparison. *Environment y Planning C: Government y Policy*, 26(1); 144 – 158.
- Hendrick, R.M. 2011. *Managing the Fiscal Metropolis: The Financial Policies, Practices, y Health of Suburban Municipalities*, Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Hermann, C.F. 1963). Some consequences of crisis which limit the viability of organization. *Administrative Science Quarterly*, 8(1), 61–82
- Hood, C. 1991. A Public Management For All Seasons?, *Public Administration* 69 (1): 3–19.
- Hood, C. 1995. The New Public Management in the 1980s: variations on a theme. *Accounting, Organizations y Society* 20, 93–109.
- Honadle, B. W., 2003. The states' role in U.S. local government fiscal crises: A theoretical model y results of a national survey. *International Journal of Public Administration*, 26 (13), 1431-1472
- James, E.H., y Wooten, L.P. (2006). Diversity crises: How firms manage discrimination lawsuits. *Academy of Management Journal*, 49(6), 1103–1118.

- James, E.H., y Wooten, L.P. (2010). *Leading under pressure: From surviving to thriving before, during, y after a crisis*. New York: Routledge Press.
- Karp, T. 2005. Unpacking the mysteries of change: Mental modeling. *Journal of Change Management*, 5(1): 87-96.
- Kelman, Steven J. 2002. Contracting. In *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*, edited by Lester M. Salamon, 282–318. New York: Oxford University Press.
- Kodrzycki, Y. 1998. Fiscal pressures y the privatization of local services. *New England Economic Review*, 39–50.
- Laughlin, R. y Pallot. J. 1998. Trends, Patterns y Influencing Factors: Some Reflections in O. Olson, J. Guthrie y C. Humphrey (eds.), *Global Warning; Debating International Developments in New Public Financial Management* (Cappelen Akademisk Forlag: Oslo), 376-99.
- León Ledesma, J., Dorta Velázquez, J. y Pérez Rodríguez, J. 2010. “Contraste de los modelos de asignación presupuestaria en el presupuesto social municipal”, *Gestión y Políticas Públicas*, vol. XIX, 2, 351-394.
- López-Hernandez, A.M, Zafra-Gómez, J.L. y Ortiz-Rodríguez, D. 2012. Effects of the crisis in Spanish municipalities’ financial condition: an empirical evidence 2005–2008, *International Journal of Critical Accounting*, 4, 4.
- Maitlis, S., y Sonenshein, S. (2010). Sensemaking in crisis y change: Inspiration y insights from Weick. *Journal of Management Studies*, 47(3), 551–580.
- Mercer, T. y Gilbert, M. (1996). A Financial Condition Index for Nova Scotia Municipalities, *Government Finance Review*, 12, 5, 36-38.
- Miralles, A. (2009), A Duration Model Analysis of Privatization of Municipal Water Services, *Revista de Economía Aplicada*, 17 (50), 47-75.

- Miranda, R. 1994. Explaining the privatization decision among local governments in the United States. *Research in Urban Policy*, 5: 231-274.
- Moss, L. (2010). The 13 largest oil spills in history. Mother Nature Network, Retrieved from <http://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/stories/the-13-largest-oil-spills-in-history>.
- Morgan, D. R., Meyers, y R. E. England. 1981. Alternative to municipal delivery forms: A four-states comparison, *Southern Review of Public Administration*, 184-99.
- Nelson, M. 1997. Municipal government approaches to service delivery: an analysis from a transaction cost perspective. *Economic Inquiry*, 35(1): 82-96.
- Osborne, D. y Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*, New York: Plume/penguin Books.
- Pollitt, C. y Bouckaert, G. 2000. *Public Management Reform. A Comparative Analysis* (Oxford University Press).
- Rodrigues, M., Tavares, A.F., y Araujo, J.F. 2012. Municipal Service Delivery: The Role of Transaction Cost in the Choice between Alternative Governance Mechanisms, *Local Government Studies*, DOI:10.1080/03003930.2012.666211
- Rosenthal, U., Charles, M.T. y 't Hart, P. (eds.), (1989), *Coping with Crises: The Management of Riots, Disasters y Terrorism*, Charles C Thomas, Springfield.
- Rubin, I., y Stein, L., 1990. Budget Reform in St. Louis: Why Does Budgeting Change? *Public Administration Review*, 50, 4, 420-426.
- Salinas, J. y Álvarez, S. (2002), "La efectividad de los límites al endeudamiento autonómico: una perspectiva de teoría de la elección pública" Subdirección General de Estudios Presupuestarios y de Gasto Público. Instituto de Estudios Fiscales.

- Savas, E. S. 2000. *Privatization y Public– Private Partnerships*. New York: Chatham House Publishers.
- Smith, D.L. 2012. An Empirical Framework for Public Finance y Financial Management, *Public Administration Review*, DOI: 10.1111/j.1540-6210.2012.02650.x
- Stein, R.M. .1990. *Urban Alternatives. Public y private markets in the provision of local services*, Pittsburgh (PA): University of Pittsburgh Press.
- Tavares, A. y Pedro J. Camões .2007. Local service delivery choices in Portugal: A political transaction costs framework, *Local Government Studies*, 33:4, 535-553
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures, *Journal of Political Economy*, 64, 416-424.
- Van Helden, G.J., 2000. Is financial stress an incentive for the adoption of businesslike planning y control in local government?. A comparative study of eight Dutch municipalities. *Financial Accountability y Management*, 16 (1), 83-100.
- Walls, M., Macauley, M. y Anderson, S., 2005. Private markets, contracts, y government provision. What explains the organization of local waste y recycling markets?. *Urban Affairs Review*, 40 (5), 590–613.
- Zafra-Gómez, J.L., A.M. López-Hernández y A. Hernández-Bastida. 2009a. ‘Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government: Evaluating Service Quality y Minimizing the Effects of the Socioeconomic Environment: An Application to Spanish Municipalities’, *American Review of Public Administration*, 39, 4, 425–49.
- Zafra-Gómez, J.L. y M. Muñiz. 2010. ‘Overcoming Cost-Inefficiencies within Small Municipalities: Improve Financial Condition or Reduce the Quality of Public Services?’ *Environment y Planning C: Government y Policy*, 28, 4, 609–29.

- Zafra-Gómez, J.L. Rodríguez Bolívar, M.P., y Alcaide-Muñoz, L 2012. Contrasting New Public Management (NGP) Versus Post-NGP Through Financial Performance: A Cross-Sectional Analysis of Spanish Local Governments, *Administration y Society*, DOI: 10.1177/0095399711433696
- Zafra-Gómez, J.L., López-Hernández A.M. y Hernández-Bastida, A. 2009. 'Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government: Evaluating Service Quality y Minimizing the Effects of the Socioeconomic Environment: An Application to Spanish Municipalities', *American Review of Public Administration*, 39, 4, 425–49.
- Zafra-Gómez, J. L.; Prior, D., Plata-Díaz, A.M. y López-Hernández, A.M., 2012. Reducing costs in times of crisis: Delivery forms in small y medium sized local governments' waste management services, *Public Administration*, Article first published online: 13 JAN 2012, DOI: 10.1111/j.1467-9299.2011.02012.x
- Zullo, R., 2009. Does Fiscal Stress Induce Privatization? Correlates of Private y Intermunicipal Contracting, 1992–2002, *Governance*, Vol. 22, No. 3, July, 459–481.

ANEXO 1. TABLA 1

Elementos de la Condición Financiera		Indicadores	Definición
Solvencia a c/p		Índice de relevancia del remanente de tesorería (IRT)	Remanente de tesorería gastos generales/obligaciones pendientes pago
Solvencia presupuestaria	Flexibilidad	Índice de ingresos fiscales por carga financiera (IPCF)	Ingresos fiscales/carga financiera anual- intereses y principal-
	Independencia	Índice de independencia financiera (IIF)	Obligaciones reconocidas netas/derechos reconocidos
	Sostenibilidad	Índice de resultado presupuestario no financiero (IRPNF)	Obligaciones reconocidas netas cap. I a VII/ derechos reconocidas netos cap. I a VII
Variables de control		Orientación Política (SIG)	Variable dummy: "0" Ideología progresista y "1" Ideología conservadora
		Fortaleza política (FOR)	Variable dummy: "0" Coalición y "1" Mayoría Absoluta
		Población (POP)	Nº de habitantes

ⁱ Las entidades locales tienen obligación de remitir copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración General del Estado antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda (artículo 193.5 TRLRHL). No obstante, no todos los ayuntamientos han suministrado información en cada uno de los ejercicios evaluados. Al final de todo el proceso el número de ayuntamientos que presenta información en todos los ejercicios analizados ascienden a 1.043.